



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 22

JUNIO 2008

Viejos fantasmas, nuevos peligros

La reciente y controvertida decisión del Consejo Supremo Electoral, CSE, de cancelar la personería jurídica a dos partidos políticos, el Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, y el Partido Conservador, PC, podría haber pasado como una anécdota más del manejo político discrecional instaurado por el PLC y el FSLN en todas las instituciones del estado. No es la primera vez que se eliminan partidos políticos con recursos legales de dudosa consistencia y el cálculo político era soportar un poco de pataleo para, más temprano que tarde, regresar a la normalidad que permite la capacidad de imponer. Pero la decisión más bien parece haber desencadenado una sonora alarma, más allá de las voces que venían advirtiendo sobre los peligros del estilo político del gobierno y las consecuencias del Pacto Ortega-Alemán sobre toda la institucionalidad. Sin duda, un nuevo parteaguas ha desnudado el conflicto en torno a la evolución del país.

Dictadura versus democracia: ¿se repite la historia?

La cancelación de la personería del MRS y el PC ha sido denunciada por los afectados como evidencia de la imposición de una nueva dictadura que, según algunas versiones, es un retorno al somocismo o una forma actualizada de éste. En una reacción natural seguidores del gobierno calificaron esta denuncia como descabellada. Evidentemente, la conciencia de los que están en el poder no es la misma de quienes lo sufren o lo soportan y los argumentos con que responden se basan en una comparación con el somocismo que controlaba a las fuerzas armadas, reprimía a sus opositores, dependía de Estados Unidos y era nepótico. Ninguna de estas caracte-



rísticas se encontraría en el actual régimen político, de tal manera que las acusaciones no serían más que un artificio propagandístico orquestado por fuerzas de derecha que, como en Venezuela y Bolivia,

se oponen y conspiran contra un gobierno de izquierda.

Sin embargo, el debate sobre dictadura y democracia no es menor, y el hecho de que surja nuevamente 29 años después de la caída de la dictadura muestra la sensibilidad de la memoria colectiva ante este recuerdo.

En Nicaragua, los antidotos para la reedición de un régimen político dictatorial probablemente son muy resistentes, pero el país no es inmune de evolucionar hacia un régimen autoritario si el punto de partida es una democracia abortada.

El antecedente histórico de la interrogante

Establecer la contradicción entre dictadura y democracia requiere un balance apropiado y una perspectiva histórica que considere, además de los elementos represivos y la dependencia externa, la configuración del régimen político y la forma de gobernar. Nicaragua no tiene una historia democrática, la ha estado construyendo y la caída de la dictadura somocista en 1979, fue el primer paso refundador de la historia.

El control sandinista sobre el Estado generó un periodo de indecisión pues los elementos de democracia inherentes a un periodo de movilización social intensa se contra-

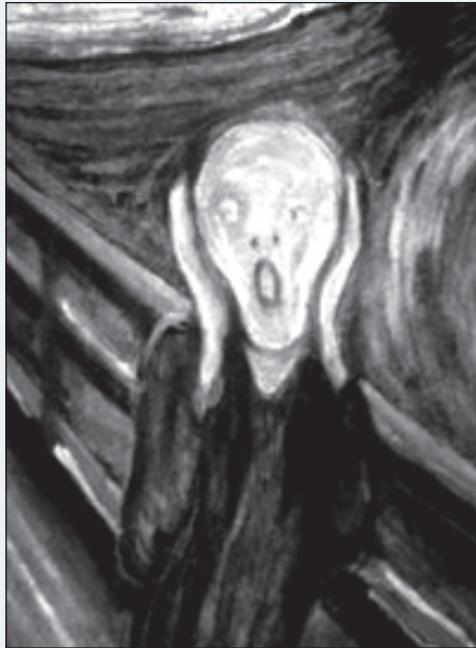
decían con el ejercicio centralizado del poder. Además, la construcción de las instituciones democráticas quedó en un paréntesis mientras se desarrollaban las organizaciones sociales vinculadas verticalmente con el FSLN. La revolución, como acto fundador, creaba su propia institucionalidad y era, por lo tanto, fuente de su propia legitimidad política.

Con las presiones internacionales, el desgaste político y la necesidad de aumentar la legitimidad se realizaron elecciones en 1984, ganadas por el FSLN con amplia mayoría; en este hecho, la fuente de legitimidad y acceso al gobierno se trasladó de la revolución al ejercicio del voto y al funcionamiento de un incipiente andamiaje democrático consagrado en la Constitución Política de 1987. Este fue el segundo paso histórico en la construcción democrática.

El FSLN perdió las elecciones de 1990 y aceptó la sanción electoral. Los siguientes procesos electorales presidenciales, municipales y regionales legitimaron aún más este mecanismo democrático de acceso al gobierno. Los elementos básicos de la institucionalidad democrática fueron aceptados de ahí en adelante por todas las fuerzas políticas, pero se requería además, un modo de gobernar democrático. Es decir, si bien la democracia ordena el sistema político con normas y procedimientos, el modo de gobernar está determinado por la estructura de poder, los intereses que contiene y los proyectos políticos que impulsa. Ahí es donde se encuentra la especificidad de cada régimen político.

Durante la primera mitad de los 90 una multiplicidad de actores se involucró en el intenso proceso de cambios en el modelo político y eco-

nómico del país. Sindicatos, gremios, ejército, empresarios y partidos políticos, entre otros, interactuaron constantemente, muchas veces de manera conflictiva a fin de encontrar la viabilidad indispensable para la transición política y las reformas económicas. Pero las transacciones entre grupos de poder que dieron forma a los cambios, tuvieron serias consecuencias sobre la institucionalidad y la democracia.



A medida que se fueron definiendo los ganadores y perdedores, en la estructura de poder económica y política las eventuales diferencias ideológicas y conflictos se fueron diluyendo por la mutua dependencia de intereses. La llegada al gobierno de Arnoldo Alemán en 1997, coronó ese acercamiento cuando el PLC y el FSLN se aseguraron la hegemonía de los ganadores con el llamado "Pacto". Las transacciones que le dieron forma a este acuerdo político incluyeron la modificación de la Ley Electoral y sucesivas reformas a la Constitución Política a fin de imponer un esquema bipartidista y ase-

gurar la distribución de cargos entre ambos partidos en las principales instituciones del Estado. El sistema político se bloqueó y ambos partidos aseguraron sus respectivas cuotas de impunidad y discrecionalidad.

El retorno de Daniel Ortega al gobierno en el 2007, agravó todos los problemas generados por el Pacto, y además trasladó sus métodos de conducción partidarios al gobierno, generando un estilo centralista, autoritario y discrecional, organizado sobre estructuras paralelas y subterráneas.

En este escenario, la competencia que fuerzas emergentes como el MRS, el PC, Vamos con Eduardo, o cualquier otra, puedan realizar debilita el objetivo de establecer un sistema bipartidista con el FSLN y el PLC como fuerzas dominantes. Este objetivo se ha convertido en una necesidad urgente frente al serio desgaste del gobierno en la opinión pública durante su primer año de gestión. Eso convierte a las fuerzas emergentes como potenciales actores de recambio.

Los signos de alarma

La última resolución del CSE tiene como gran consecuencia la generación de una situación donde quizá, como nunca antes, se perciben los peligros para el proceso democrático del país, lo que ha hecho salir de la reserva política a muchos que hasta ahora, habían preferido evitar los costos de asumir posiciones públicamente.

Este reposicionamiento político no es entre sandinismo y antisandinismo, como quiere dar a entender el gobierno, sino entre los liberales y sandinistas atrincherados en la estructura de poder y quienes coinciden desde diversas posiciones con el objetivo de más apertura política. Esta nueva línea de posicionamiento es más transversal de lo que se pueda imaginar, pues cruza a todos los partidos y sectores, organizaciones



sociales e instituciones que se encuentran asfixiados dentro del modelo de conducción política del país. Los signos de alarma que han hecho cambiar la manera de ver temas como la democracia, las elecciones municipales y la eventualidad de una crisis mayor, son los siguientes:

- La subordinación de las instituciones a la estructura de poder y los intereses personales. El problema no es que estén sandinistas y liberales en instituciones públicas, sino que los que ocupan esos cargos impiden el pluralismo, la independencia de poderes, el estado de derecho y la garantía de los derechos.
- Uso de cargos públicos con fines clientelistas. El problema no es que haya fieles a esa estructura de poder en cargos públicos y políticos, esa es una decisión personal, el problema es que utilicen los cargos con fines clientelistas, prebendarios y de enriquecimiento ilícito.
- Cierre de espacios políticos. El problema no es que dos partidos quieran ser mayoritarios, sino que tuerzan la ley para imponer el bipartidismo y cerrar los espacios políticos a otras fuerzas políticas sin que medie la voluntad ciudadana en ello.
- Negociaciones excluyentes. El problema no es que se realicen negociaciones y reformas políticas, sino que sean secretas, inconsultas, excluyentes y con el objetivo de perpetuar la estructura de poder, sin posibilidades de control ni sanción, ya sea legal y/o social.
- Exclusión e impunidad. El problema no es que las cúpulas liberales y sandinistas tengan un pacto, sino que lo utilicen como

mecanismo de exclusión y control impune del poder.

Esos son los elementos de autoritarismo que están desgastando la construcción de la democracia. De ahí que, mantener las elecciones sin la calidad suficiente para fundamentar la legalidad y la legitimidad del acceso al gobierno, cuestiona al sistema político y sus autoridades. El comportamiento del CSE y la aplicación de un doble rasero para ejercer su mandato, sin posibilidades de interpelación porque sus resoluciones son inapelables, tiene un impacto anticipadamente negativo en el ejercicio electoral. Elecciones habrá, pero ya no serán la base de la democracia.

El estado del pluralismo, las libertades y los derechos constituye un elemento fundamental de las democracias. Puede que existan formalmente sin ser respetados, pero también pueden ser manejados selectivamente favoreciendo a unos y castigando a otros. La impunidad con que actúan las cúpulas y sus allegados evidencia esta situación.

La respuesta a las demandas y conflictos por medio de instituciones abiertas al diálogo y a la negociación transparente indican estándares de un gobierno democrático. En el caso de Nicaragua, la evidencia acumulada es negativa, particularmente en la relación entre el gobierno y la sociedad. Además, la existencia de políticas de base amplia e incluyente, que reduzcan las diferencias sociales evidencian si la estructura de poder actúa en un sentido democrático; sin embargo, pese a los discursos sobre la pobreza, la estructura de poder del país refuerza una nueva capa de ricos apoyados en el arribismo social, mientras se profundizan las diferencias sociales.

El uso de la represión puede adoptar diversas formas en los regímenes políticos. Evidentemente, la represión a movimientos sociales

por motivos políticos evidencia la disposición de un régimen a impedir la crítica, la alternancia política y la sanción democrática. Muchas veces, se puede lograr el mismo efecto sin necesidad de recurrir a la represión violenta, utilizando medios no oficiales. En otras ocasiones, el recurso puede ser el uso de información y los mecanismos institucionales para presionar y condicionar a los adversarios. También en este sentido en el país hay evidencia negativa.

Aunque parezca subjetivo, el respeto de una ética política también es importante en un régimen democrático. La democracia implica el respeto de principios, normas y procedimientos mientras que la dictadura representa el grado más alto de concentración del poder, anulación de los derechos y las instituciones y el uso de la violencia en cualquiera de sus formas. Si un gobierno evoluciona en esta última dirección a pesar de haber sido elegido bajo reglas democráticas, significa que el autoritarismo carcomerá los cimientos del régimen democrático.

El hecho de que en Nicaragua coexistan elementos de democracia con formas de autoritarismo, expresa el conflicto entre intereses y proyectos políticos que buscan realizarse mediante una u otra forma. Más temprano que tarde uno se impondrá al otro, la interrogante es cuál y con que consecuencias para todo el país. En este híbrido político, quienes afirman que hay una dictadura en marcha, encontrarán sus argumentos, y quienes lo niegan, exhibirán la existencia de las libertades y derechos que subsisten. Lo que ninguno puede hacer es esconder el conflicto; de allí que la interrogante entre democracia y autoritarismo sea válida en Nicaragua.

Atrincheramiento y movilización

Toda contradicción que se expresa políticamente requiere expli-

caciones comprensivas y posicionamientos nuevos o de reafirmación. En ese sentido, la realidad actual está operando un reposicionamiento de los actores.

Las posiciones oficialistas se están crispando en un atrincheramiento discursivo, político y organizativo. Esto se hace evidente en la reacción de los medios de comunicación controlados por el gobierno y el lenguaje oficial cada día más violento y descalificador. Una respuesta clásica frente al desgaste político generalizado y el descontento mudo, pero real, que crece al interior de sus propias filas.

Ahora bien, ese deterioro no puede ser compensado con un poco de dádivas aquí, otro poco de dinero allá, la ronda de fieles movidos según conveniencia, la propaganda y los anuncios espectaculares sobre programas gubernamentales. La realidad es que, mientras más se intensifique la propaganda, más se hablará sólo a los convencidos. Los oficialistas parecen no comprender que en la balanza no compensa un programa social contra la forma de gobernar el país.

El hecho que el gobierno haya caído tan estrepitosamente en la opinión pública, incluida la sandinista, es un fenómeno que no se puede atribuir únicamente a la oposición. Se debe a un desfase político en términos de percepción de la realidad, métodos anacrónicos y una ausencia de vida política interna que permita la crítica, corregir errores y renovarse políticamente. Los discursos de la dirección danielista amalgaman lugares comunes, frases desprovistas de análisis y descalificaciones que no comprenden la diversidad que el país ha alcanzado.

La razón de este comportamiento insensible a la realidad, sin

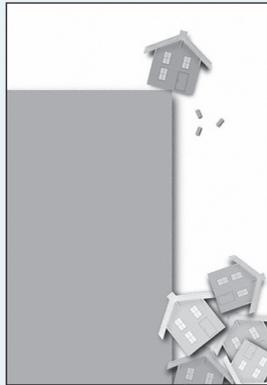
hacer psicoanálisis, radica en que la estrategia de reproducción en el poder por parte del oficialismo sandinista, está determinada por quebrar a los adversarios y cerrar espacios, en vez de ampliar su base, expandir la democracia y el pluralismo. Exigen alineamiento en vez de alianzas, diálogo y apertura política. Así, apenas aparece la menor discrepancia, la mano del poder pierde el guante de seda.

Por su parte, los liberales están divididos entre la fracción pactista y los que se han distanciado; ambos

grupos se disputan la base partidaria y el paraguas del liberalismo. Atacados por el oficialismo viven en la esquizofrenia de mantener el pacto con quienes los exponen y desgastan e independizarse políticamente de ese vínculo. Esto último los arrastraría inevitablemente a

la ruptura con Alemán, colocándolo frente al desafío de refundar un partido decente.

Un hecho nuevo es que se produzca una coincidencia práctica y con potencial de movilización entre organizaciones sociales, políticas, asociativas y juveniles, que por primera vez podría hacerle frente al bipartidismo de facto y al Pacto. Esta tendencia se había manifestado hasta ahora sólo como una comunidad de valores y de prácticas; sin embargo, poco a poco se van encontrando ahora en una identidad democrática, a pesar de los distintos orígenes, las experiencias diversas y los prejuicios que pesan entre unos y otros. La alianza MRS ha logrado ser un pivote esencial en esta situación y la reciente huelga de hambre de Dora María Téllez, uno de sus principales catalizadores.



Aunque este proceso aún debe obtener un reconocimiento nacional, su visibilidad ha aumentado incluso en el plano internacional, tal como se puede ver en la carta que destacados intelectuales y militantes de izquierda de diferentes países, dirigieron al gobierno. El tiempo de cristalización y maduración de una forma organizativa capaz de canalizar esta movilización es una incógnita, pero el proceso está en marcha. El modo de conducción orteguista ha tenido la virtud de facilitar la identificación del adversario común al exacerbar y dinamizar la federación de fuerzas que se le oponen.

¿Dónde quedan las municipales?

La situación actual ha puesto en otra perspectiva las elecciones municipales. Las condiciones en que ganó el gobierno y la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, potencialmente parecían darle una nueva trascendencia a las municipales. Para el gobierno, que ganó con una minoría, bien podían convertirse en una suerte de plebiscito favorable. Mientras, de confirmarse la apertura política con las nuevas fuerzas emergentes en la Asamblea, el bipartidismo estaría amenazado. Igualmente, perder la batalla electoral en Managua habría sido un duro golpe al oficialismo.

La cancelación legal de las posibles alternativas políticas ha puesto a las elecciones en entredicho, tanto en su legitimidad como en legalidad. De allí que el ciclo político estaría dando un paso más en contra de la base mínima para la construcción democrática: el ejercicio del voto ciudadano. Si este elemento pierde su legitimidad, ¿qué camino queda entonces para que los ciudadanos elijan a sus gobernantes?, ¿cómo expresarán su voluntad política?. Las decisiones políticas tomadas encierran un diseño autoritario y falta de responsabilidad política. Ambos son extremadamente peligrosos.